



La respuesta no está en el acordeón

Mientras las autoridades de este país se entretienen en diseñar y poner en marcha una estrategia que evite que la elección judicial sea un fracaso, garantizar la participación ciudadana y lograr que sus jueces, magistrados y ministros ganen el 1 de junio —mediante acordeones y acarreo—, en el país crecen la violencia homicida, delictiva y de alto impacto, así como otros delitos federales y locales.

Los ciudadanos mexicanos no están interesados en la elección judicial ni conocen a los candidatos, por más papellitos que impriman y distribuyan con los nombres de los candidatos de la 4T, porque miles viven bajo fuego, otros miles lloran a sus asesinados, otras más buscan a sus desaparecidos, otros pagan la "cuota", el "derecho de piso", la extorsión o el rescate; unos cientos más son asaltados en las carreteras o despojados de sus bienes.

Aferrarse a que la elección judicial parezca un éxito y valerse de todo tipo de argucias le costará caro a la Cuarta Transformación.

Ésta es la radiografía actual del país, según la información recopilada por México Evalúa: en nueve entidades, los habitantes padecen los estragos de la disputa y control de territorio que reclama el CJNG. Me refiero a quienes viven en Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Edomex, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, porque en Jalisco tiene hegemonía.

En Sonora y Sinaloa, la violencia se produce por el pleito entre La Chapiza y La Mayiza, así como por la rivalidad entre facciones del otrora cártel de Sinaloa contra organizaciones criminales de Chihuahua. El Estado de México vive las secuelas de una guerra entre multitud de organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, como CJNG, Sinaloa, Unión, Anti Unión, Tren de Aragua y Peralvillo.

Puebla es el escenario cotidiano de robo a transportistas, pero lo peor es que ahí los grupos criminales se disputan el control por el atraco y el tráfico de combustible (huachicol).

En el reporte Violencia delictiva en los estados, enero-abril 2025. ¿Cuáles son los focos rojos?, México Evalúa revela que los asesinatos, balaceras y persecuciones cotidianas en el noroeste del país se deben a la guerra entre Los Chapos y Los Mayos, así como a la posible participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de una alianza con los hijos de **Joaquín Guzmán Loera**.

"En el sureste hay reacomodos violentos del control territorial del crimen organizado principalmente en Tabasco, por la guerra entre el CJNG y La Barredora. En el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, buscan apropiarse de los mercados ilícitos", dice el estudio. Y es que la extorsión, secuestro, cobro de piso, despojo y ocupación de propiedades, invasiones, feminicidios, asaltos, robos y narcomenudeo son parte de la cotidianidad de la ciudad y zona metropolitana. Realidad que las autoridades no quieren ver y mucho menos atender.

Los asesinatos de **Ximena Guzmán**, secretaria particular, y de **José Muñoz**, asesor de la jefa de gobierno, **Clara Brugada**, perpetrados con altísimo nivel de profesionalismo criminal, reveló la capacidad del crimen organizado para vulnerar el aparato de seguridad y justicia de cualquier entidad federativa.

El análisis de México Evalúa identifica como focos de violencia a entidades como la CDMX, Sinaloa, Puebla y Tabasco, porque experimentan un deterioro acelerado de la seguridad en varios frentes. En otras, los problemas prevalecen desbordados, como Colima, Morelos y Sonora. Se trata principalmente de estados en donde la actividad del crimen organizado se encuentra detrás de la violencia delictiva, ya sea por la disputa del territorio o la explotación consolidada de los mercados ilícitos.

Los focos de paz los ubica únicamente en estados como Yucatán, Querétaro y Coahuila, donde se detectan políticas públicas robustas, con soporte técnico en materia de seguridad y justicia.

Así de violento está el país, pero lo que importa por ahora es no hacer el ridículo con la elección judicial.

La respuesta a esta crisis de seguridad no está en los acordeones.